Audiencia Pública 197° de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Intervención de las organizaciones de la sociedad civil

Argentina: Impactos de las políticas migratorias en los derechos humanos de las personas migrantes



Martes 27 de octubre de 2026 -
Ciudad de Panamá (Panamá)

CAREF Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes · CELS · MTE Movimiento de Trabajadores Excluidos · EdlPo Investigación Política

CTA autónoma · CTA Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina · Red Nacional de Migrantes y Refugiadxs en Argentina

Saludamos a la Comisión y a la representación del Estado.

Soy Lucía Galoppo, del CELS.

Quisiera comenzar señalando que la reforma migratoria a la que nos referiremos, adoptada mediante decretos del Poder Ejecutivo, tiene efectos en, al menos, dos niveles. En primer lugar, afecta los derechos de las personas migrantes, que se ven restringidos de manera muy significativa. Pero además, estas reformas reflejan una transformación profunda del rol del Estado y del enfoque con el que se aborda la migración.

Durante más de veinte años, Argentina contó con una política migratoria construida sobre el reconocimiento de la migración como un derecho humano, con una mirada realista, de protección, inclusión e integración.

La Ley de Migraciones de 2004 representó un cambio de paradigma respecto de las políticas restrictivas anteriores. La regularización, la reunificación familiar y el acceso a derechos ocuparon un lugar central en ese modelo, que se convirtió en una referencia para la región. Hoy estamos ante un proceso de desarticulación abrupta de ese enfoque.
Desde 2024, y especialmente durante el último año, el Gobierno argentino adoptó una serie de medidas que dificultan el acceso a la residencia regular y al sistema de asilo, restringen derechos y trasladan la gestión migratoria y de protección de refugiados a la órbita del Ministerio de Seguridad. Todo esto acompañado de un discurso alarmista y criminalizador.

Estas medidas, que no fueron tratadas por el Congreso, forman parte de una estrategia que asocia a la migración con la inseguridad y construye la idea de que las personas migrantes son una amenaza para la sociedad. Ello se expresa tanto en las decisiones institucionales como en los discursos de las máximas autoridades del país.

Hace apenas unas semanas, el propio Presidente de la Nación afirmó públicamente que su gobierno había expulsado a 30.000 “terroristas” durante los últimos dos años. Y los describió como personas que ingresaban al país para intentar “dinamitar el modelo argentino”.

Estas afirmaciones no encuentran respaldo en las estadísticas oficiales. Pero, más allá de la falta de sustento de esas cifras, lo que nos preocupa especialmente es el sentido político de estas declaraciones.

El lenguaje del terrorismo se expande cada vez más para nombrar fenómenos que nada tienen que ver con lo que se pretende abordar, habilitando a los Estados a adoptar medidas excepcionales que acaban restringiendo la vida política y el espacio cívico. Su uso para caracterizar a las personas migrantes contribuye a construir la figura de un enemigo interno, cuya presencia representa una amenaza para la sociedad. Esta construcción tiene consecuencias concretas: legitima el despliegue de fuerzas de seguridad, habilita prácticas policiales cada vez más violentas y presenta la restricción de derechos como una respuesta necesaria frente a un peligro que el propio discurso oficial instala.

En el marco de esta estrategia, el Estado impone obstáculos cada vez mayores para acceder a una residencia regular. Las nuevas exigencias administrativas y económicas afectan especialmente a las personas migrantes de menores recursos, que encuentran crecientes dificultades para regularizar su situación y sostener sus proyectos de vida en el país.
Al mismo tiempo, mientras se endurecen las condiciones para acceder a la residencia y a la ciudadanía, el Gobierno promueve mecanismos extraordinarios de naturalización para quienes realizan desembolsos de cientos de miles de dólares. Se profundiza así una política migratoria desigual que establece condiciones de acceso y permanencia cada vez más restrictivas para los sectores empobrecidos y abre vías privilegiadas para quienes disponen de grandes recursos económicos.

Esta lógica se expresa también en la intensificación de los operativos de control migratorio. El despliegue intimidatorio de fuerzas de seguridad y la exposición mediática de estos procedimientos contribuyen a consolidar la asociación entre migración y criminalidad. La propaganda oficial utiliza imágenes de operativos y expulsiones para exhibir la actuación policial y reforzar la estigmatización de las personas migrantes.

Por supuesto, esta transformación no puede desvincularse del contexto regional. La política migratoria argentina muestra un creciente alineamiento con la agenda de seguridad y control migratorio impulsada por Estados Unidos, en un escenario en el que la movilidad humana es presentada cada vez más como una invasión.
Estas políticas buscan consolidar en la región un paradigma securitario y punitivo de la migración, frente a la perspectiva de inclusión y de derechos humanos. Esta orientación ya deriva en más desigualdad, más violencia, más miedo.

Las intervenciones que siguen muestran las consecuencias de estas políticas sobre la vida de las personas. Es fundamental que esta Comisión advierta la gravedad de este retroceso y sus implicancias para los estándares de protección de los derechos humanos que Argentina contribuyó a consolidar en la región.

Muchas gracias.

Buenos días, soy Nicolás Figari de CAREF, Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes.

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366, publicado en mayo de 2025, dio por tierra con una política migratoria desplegada durante veinte años que promovió y facilitó la regularización de la residencia de más de un millón y medio de migrantes sudamericanos, 15% de los cuales eran niñas y niños. Esa política de regularización aseguró un pasaje fluido de la residencia temporaria a la residencia permanente, y otorgó a las personas migrantes un Documento Nacional de Identidad, indispensable para casi todas las actividades de la vida cotidiana.

En mayo de 2025, mediante los cambios que introdujo a la ley migratoria, el DNU 366 derrumbó dos pilares centrales de esa política.
Por un lado, restringió gravemente el acceso a la residencia permanente (y a la renovación de la residencia temporaria), al agregar un requisito: contar con medios económicos suficientes para subsistir en Argentina (se pide un monto equivalente a alrededor de 1000 dólares mensuales para una familia de cuatro personas). Este requisito, que sólo puede demostrarse con medios de prueba vinculados al trabajo registrado, es especialmente absurdo en un país donde (según un informe reciente del propio gobierno) el 45% de los trabajadores no están registrados.

Desde que el DNU 366 entró en vigencia, las residencias permanentes otorgadas se redujeron a la tercera parte: de 24.000 a 8.000 por semestre. Así, miles de personas y familias migrantes fueron empujadas a la irregularidad migratoria al introducirse una exigencia que muchísimas personas argentinas no podrían cumplir si les fuera requerida cada vez que tienen que renovar su documento de identidad.
Además, el DNU 366 quitó el derecho a la residencia permanente que correspondía a cualquier persona extranjera que tuviera hijo, hija o

cónyuge argentinos. Ni siquiera la dictadura cívico militar se atrevió a desconocer los vínculos familiares de semejante manera.

Por otro lado, este Decreto estableció que, salvo que se trate de una urgencia, el acceso gratuito al sistema público de salud nacional sólo está garantizado para quienes cuenten con una residencia permanente. Con esa residencia permanente que es cada vez más difícil de obtener.
En los últimos años, y en espejo con los cambios ocurridos en la ley migratoria, varias provincias argentinas establecieron restricciones adicionales y propias para el acceso gratuito a la atención sanitaria en los hospitales y centros de salud públicos. La manera en que operan concretamente estas restricciones varía según la jurisdicción, pero un relevamiento reciente mostró un panorama desolador: se interrumpieron tratamientos, medicación y estudios; hubo solicitantes de asilo que no fueron atendidos; hubo mujeres embarazadas que no recibieron atención oportuna, y sus bebés pasaron días internados en terapia neonatal; hubo niñas, niños y adolescentes que recibieron atención sanitaria de manera esporádica y discontinua.

Estos ejemplos representan una minúscula fracción de las personas y familias afectadas. Todas tenían domicilio real, trabajo y arraigo en las ciudades donde vivían, aunque algunas, por diversos motivos, no contaran con “los papeles” para demostrarlo. Como resultado de estas medidas y estas prácticas, muchas familias están dejando de concurrir a los servicios de salud porque saben que no serán atendidos. En algunos casos suponen, (y no sin fundamentos) que, en cualquier momento, los hospitales se convertirán en ámbitos que denuncien su falta de documentos, antesala a una orden de expulsión.

Estas restricciones al acceso a la salud, escritas en el texto de la norma, darán lugar a ingresos de urgencia, más complicados y más costosos para los sistemas de salud locales, e infinitamente más riesgosos para la salud y el bienestar de miles de personas y familias.

Buenos días. Mi nombre es Lourdes Rivadeneyra. Soy migrante, militante y referente de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina.

Hoy quiero expresar mi profunda preocupación por la situación que estamos atravesando las personas migrantes a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que nos coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.

Tal como lo comentaron mis compañeras y compañeros, este decreto endurece las condiciones de ingreso y permanencia en Argentina, modifica los procedimientos de expulsión y establece restricciones en el acceso a determinados servicios de salud y a la educación universitaria pública para quienes no tenemos residencia permanente. Estas medidas, lejos de resolver los problemas, profundizan las desigualdades, la precariedad y las dificultades para ejercer nuestros derechos.

Desde nuestra organización recibimos reiteradas denuncias por hostigamiento, violencia, controles de identidad, requisas y demoras arbitrarias contra personas migrantes en la vía pública. Llamativamente, siempre son personas de piel morena, con rasgos indígenas o afrodescendientes. Como yo. “Portación de rostro” le decimos en Argentina. Esto no es un hecho aislado: es una expresión del racismo, de la discriminación y de la violencia institucional que venimos denunciando y que no podemos naturalizar.

Por otro lado, se acercan mujeres migrantes, madres de familia, únicas jefas de hogar, que están a punto de perder su residencia (a pesar de tener hijos e hijas argentinas) ya que no pueden cumplir con los requisitos que exige la DNM. Y que por cierto, cambian cada día.
Como migrante, deseo dejar en claro que no podemos hablar de estas medidas únicamente desde lo jurídico o lo administrativo.

Detrás de cada norma hay personas, familias, mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Hay vidas, historias, sueños y proyectos que merecen respeto.

Estas políticas impactan directamente en nuestra vida cotidiana. Profundizan la precariedad laboral, dificultan el acceso a la salud, la continuidad de proyectos individuales, de la familia y pueden generar separaciones familiares.

El miedo a una expulsión puede llevar a una persona migrante a soportar abusos laborales, salarios adeudados o violencia policial por temor a denunciar y terminar perjudicada por su situación migratoria. Así, nuestros derechos quedan condicionados por el miedo.

Sabemos que el Estado tiene la facultad de regular las fronteras y establecer normas migratorias. Pero ninguna norma puede justificar la persecución, los malos tratos ni la vulneración de los derechos humanos. Les guste o no, LA MIGRACIÓN ES UN DERECHO HUMANO. La irregularidad administrativa no nos convierte en delincuentes. Ser migrantes no nos quita la dignidad ni nuestros derechos.

Hoy, como migrante y militante de la Red de Migrantes y Refugiadxs, levanto la voz por quienes tienen miedo, por quienes sufren discriminación y por quienes no encuentran espacios para ser escuchados.

Defender los derechos de las personas migrantes es defender una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria.
Porque migrar no es un delito, trabajar no es un delito y exigir respeto tampoco lo es. Los derechos humanos no desaparecen al cruzar una frontera.

Soy Dina Sánchez, Secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular.

Desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), reivindicamos el derecho al trabajo digno. Sin embargo, advertimos que este derecho se ha visto vulnerado debido a los diferentes operativos de "control poblacional" implementados desde este año en conjunto entre las fuerzas federales y la Dirección Nacional de Migraciones. Estas acciones se han focalizado en espacios estratégicos del comercio informal, afectando de manera directa a los vendedores ambulantes –principalmente migrantes– quienes encuentran en esta actividad su única forma de subsistencia. Estos operativos tienen como única finalidad atemorizar a la población migrante, perseguirla y hostigarla.

El DNU 366 deja en los márgenes a muchas personas migrantes que hoy hacen parte de la economía popular, ya que uno de los requisitos que incorpora este DNU es la acreditación de medios de vida para poder seguir con el trámite de regularización. Quienes integramos la economía popular no tenemos un recibo de sueldo, y en la mayoría de las veces la plata no alcanza para pagar un monotributo (que sería otra de las formas de acreditar medios de vida). Esto nos lleva a vivir en la clandestinidad e incluso precarizar todavía más nuestras propias condiciones de trabajo, ya que sin el acceso a un documento nacional de identidad es muy difícil ingresar "al mundo del trabajo". Esto genera una continua vulneración en los derechos de las personas migrantes, porque como ya lo mencionaron antes mis compañeros, sin un documento de identidad no se puede acceder al sistema de salud pública de manera gratuita, lo que afecta también el desarrollo integral de nuestra propia vida y la de nuestra familia en la Argentina.

Petitorio

Por todo lo expresado solicitamos a la Comisión Interamericana:

- Realizar una visita a Argentina a fin de relevar la situación de las personas migrantes y sus familias.
- Instar al Estado a derogar los decretos de necesidad y urgencia que alteraron la Ley de Migraciones N° 25.871 de manera injustificada y arbitraria.
- Requerir información al Estado argentino acerca del proceso de evaluación previa a la reforma de la Ley de Migraciones.
- Solicitar al Estado que evite la difusión de información inexacta, confusa y estigmatizante referida a personas migrantes, de modo de no activar discursos de odio.
- Instar al Estado a respetar y proteger la privacidad y la identidad de las personas en los materiales audiovisuales que se difunden por las redes sociales del Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y sus funcionarios.
- Expresar preocupación por el retroceso en la protección de los derechos de las personas migrantes y sus familias en Argentina.

Muchas gracias.